

SEMINARIO INTERNACIONAL

METODOS DE INFORMACION Y ANALISIS URBANO-REGIONAL

**INSTITUTO PANAMERICANO
DE GEOGRAFIA E HISTORIA
I. P. G. H.**



**7 al 11 de setiembre
San José, Costa Rica
1981**

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES

NOTAS SOBRE ESTADO, POLITICAS PUBLICAS Y ESTILO DE
DESARROLLO EN COSTA RICA

José Luis Vega Carballo

Ponencia presentada en el Seminario Internacional sobre Métodos de Información y Análisis Urbano-Regional. Instituto Panamericano de Geografía e Historia, I.P.G.H. Del 7 al 11 de setiembre, San José, Costa Rica, 1981.

NOTAS SOBRE ESTADO, POLITICAS PUBLICAS Y ESTILO DE DESARROLLO EN COSTA RICA

Durante el periodo colonial, si algo caracterizó la situación de la región, fue la debilidad de las estructuras del poder público en condiciones de predominio de una economía generalizada de subsistencia. Aunque hubo pequeños focos de explotación esclavista y capitalista en diversos lugares, estos no llegaron a generar cuantiosos excedentes susceptibles de sostener tanto una clase dominante aristocrática o burocrática, como un Estado colonial fuerte. La población vivía dispersa, alejada de los principales centros urbanos, sometida a los ciclos de las cosechas obtenidas con métodos rudimentarios, a las posibilidades de un limitado comercio fronterizo y a la ocasión del contrabando en el cual participaban hasta los funcionarios públicos. [La administración no podía siquiera cubrir sus propios gastos para los cuales dependía de la Capitanía General de Guatemala, al igual que para la defensa del territorio continuamente amenazado por las incursiones de piratas y bucaneros. Los intentos de elevar las rentas coloniales fracasaron siempre por la renuencia de los habitantes a pagar impuestos, por el contrabando y el raquitismo del sistema económico centrado en la pequeña propiedad familiar del Valle Central que concentraba a cerca del 90% de la escasa población. Las inmigraciones fueron de baja densidad, pues el país no ofrecía los atractivos de la minería, o de una abundante mano de obra indígena. Mucho menos los de una bien financiada jerarquía burocrática, militar o religiosa que en lugares como Nueva España o el Perú, se cruzaba con los intereses comerciales vía instituciones como el repartimento

de mercancías. El relativo igualitarismo que forzaba sobre la estructura social la economía parcelaria, imposibilitó en general el surgimiento de sistemas despóticos y centralizados de mando, la conscripción de mano de obra que con costo alcanzaba a garantizar su propia sobrevivencia y reproducción, y la manifestación de procesos de control político que le dieran mayor alcance a las políticas públicas coloniales. Fuera de la recolección de unas cuantas rentas, la distribución de tierras y aguas, la protección de poblados y las fronteras interiores y de algunos intentos a finales del siglo XVIII para congrega los habitantes para efectos tributarios y eclesiásticos, poco se sintió el peso de los mecanismos de la administración interior. Más se sintieron y resintieron las medidas que se tomaban desde Guatemala para frenar el comercio y la expansión de algunos cultivos como el tabaco que floreció en los alrededores de San José y permitió los primeros brotes de una acumulación de capitales antes de la llegada de la declaración de Independencia en 1821. Sin embargo, congruente con las tendencias del despotismo ilustrado y las Reformas Borbónicas, los últimos gobernadores se preocuparon diligentemente de estimular la experimentación con nuevos cultivos, incluyendo el café, con lo cual abonaron el terreno para una ulterior aceptación del intervencionismo mercantilista de Estado que de otro modo no hubiera resultado tan exitoso en el periodo nacional una vez inaugurada la época de auge del café.

* Luego de 1821 se mantuvieron prácticamente intactas las estructuras administrativas y fiscales del antiguo régimen, dentro del contexto de la República Federal Centroamericana, y las políticas públicas

se orientaron a controlar la minería que prometía bastante como medio para sacar al país de una larga postración colonial. Se enfatizó la construcción de las instituciones básicas de un régimen republicano y la mejora con grandes dificultades y limitaciones de la deficiente infraestructura que comunicaba los poblados entre sí y con el exterior. Poco en verdad se podía hacer con rentas que fluctuaban entre los \$20.000 y \$30.000 pesos y que siempre arrojaban déficits que ponían en aprietos las tareas de construcción de un Estado Nacional. Durante este periodo que hemos denominado del "Estado Patriarcal", que va de 1821 a 1842 culminando con la salida de Braulio Carrillo del poder, observamos el predominio de los intereses localistas alojados en los municipios y en el Congreso, sitios desde los cuales saboteaban de continuo las políticas públicas centralizadoras y legitimadoras de un poder institucional que pudiera emprender con sentido mercantilista, la necesaria tarea de establecer las condiciones para el logro de una economía exportadora, que llevara al país más allá de los estrechos linderos en que lo mantenía una minería que no dio los frutos esperados, un tabaco que cumplía ante todo la función de suplir las escudillas arcas gubernamentales y, en general, una estructura agrícola que no arrojaba excedentes para la exportación. Bajo tales condiciones las inclinaciones mercantilistas que propendían a fortalecer el Estado por sobre las mini-oligarquías locales se veían frustradas y paralizadas por la imposibilidad de hallar antes de los años 1830, un producto de exportación que le diera al sistema un sustento fisiocratista a partir de una agricultura comercial de exportación.

Bajo tales condiciones las inclinaciones mercantilistas que propendían a fortalecer el Estado por sobre las mini-oligarquías locales se veían frustradas y paralizadas por la imposibilidad de hallar antes de los años 1830, un producto de exportación que le diera al sistema un sustento fisiocratista a partir de una agricultura comercial de exportación. Tan pronto la ocasión se presentó con el café, las familias dominantes que venían controlando la región desde el periodo colonial, se volcaron de lleno a su siembra y transformaron la apacible campiña colonial en una pujante zona o "polo" de desarrollo que sería la base sobre la cual efectivamente se pudo levantar el Estado-Nación costarricense, es decir, un régimen de administración y tributación que hizo posible que el gobierno y sus políticas tuvieran validez y eficacia dentro de un territorio bien definido sin que lo pudieran impedir aquellos intereses localistas derrotados en la famosa Guerra de la Liga en 1835. A partir de esta fecha se hizo notorio que el Estado definiría sus políticas en función de los nuevos intereses en ascenso del sector dirigente josefino que ya controlaba el negocio cafetalero, había organizado las exportaciones y pretendía con éxito creciente que sus intereses fueran percibidos como los intereses de la sociedad entera en cuyo seno se desataron los novedosos procesos de la acumulación de capitales en una escala nunca antes vista. Poco a poco las políticas públicas se identificaron con esos intereses que se volvieron hegemónicos y principalmente las inversiones, se orientaron prioritariamente como era de esperarse a crear la infraestructura material y la superestructura jurídico-política que demandaba una agricultura comercial de exportación con la cual el capital privado estableció su imperio tanto

en el agro como en las ciudades que comenzaron a crecer velozmente bajo el acicate de dichas inversiones. Se beneficiaron con las mismas los cafetaleros aunque la distribución general más equitativa de los ingresos, permitió que los beneficios se filtraran hacia abajo y que, hasta por razones prácticas dependientes de la escasez relativa de mano de obra, las políticas públicas tuvieran que responder a ciertas demandas de la población por obtener un mejoramiento de sus condiciones materiales y culturales de existencia, como sucedió por ejemplo con la gran importancia asignada a la educación. Junto a los puentes, los caminos, las acequias, las aduanas y otros signos materiales del emergente poder estatal al servicio de los cafetaleros, fueron surgiendo las escuelas de primeras letras y algunas instituciones de salud y caridad que comenzaron a velar por la reproducción de la escasa fuerza de trabajo que tanto se necesitaba para aprovechar las magníficas condiciones con que durante todo el siglo pasado se expandió la economía agroexportadora monocultivista. Claro está que existió una clase o minoría gobernante que llegó a controlar y a manejar directamente un Estado que podríamos denominar "oligárquico-patrimonial" por su extrema vinculación con las figuras e intereses de dicha clase que lo consideraba como una extensión de su haber y hacienda privada.

Pero, desde un principio, aquella clase enfrentó ciertos frenos y contrapesos provenientes de la imposibilidad o inconveniencia pecuniaria de expropiar a los productores directos, pequeños y medianos. El afán de monopolizar la propiedad territorial, expulsarlos de sus parcelas, proletarizarlos o por el contrario someterlos a mecanismos extra-

económicos de extracción de los excedentes, es decir, de acumulación de capitales, tuvo que ir cediendo ante la necesidad de contar con su apoyo para cosechar el "grano de oro", procesarlo en los beneficios y llevarlo sin atrasos al puerto donde era embarcado hacia Europa o los Estados Unidos. Este "Estado Oligárquico-Patrimonial", manejado visible y directamente por los miembros de la nueva y poderosa clase dominante, no pudo por consiguiente evolucionar hacia una forma militar y autoritaria, prefiriéndose en su consolidación el uso de una mezcla de paternalismo con participación controlada del pueblo en los procesos políticos y en la defensa de la soberanía nacional, fenómeno que se percibió con más evidencia después de la Guerra del 56 contra los invasores norteamericanos jefeados por William Walker. Aunque como resultado de esta guerra se entronizó el militarismo por más de dos décadas, lo cierto es que los coroneles y generales se comportaron siempre como simples instrumentos de los grandes potentados que controlaban la agricultura y el comercio exterior. Una vez removido el Presidente de la República con la fuerza de los sables y las bayonetas, los militares volvían a los cuarteles, se convocaba a una Asamblea Constituyente y se alentaba a los pueblos a pronunciarse en favor del cambio de gobierno, que por lo general era bien recibido a nivel popular. Por ese camino transitaron los asuntos de Estado y hasta 1870, cuando llegó el General Tomás Guardia al poder, y terminó para siempre con los rasgos más sobresalientes de la dominación oligárquico-patrimonial, inaugurando una época decisiva en que el Estado se irá a diferenciar y a automatizar relativamente cada vez más vis-á-vis las estructuras e intereses directos de la clase dominante empresarial que se vio forzada a depositar

el control del aparato estatal y la definición e implementación de las políticas públicas en una élite política autónoma que será la encargada de conducir la sociedad bajo el signo del Estado oligárquico-liberal hasta su crisis en los años 30-40 de este siglo. Guardia hizo retroceder con el apoyo del capital financiero aportado para la construcción del ferrocarril al atlántico, la ingerencia manifiesta y exclusivista de la oligarquía agro-mercantil oponiendo a sus exigencias y manipulaciones específicas la idea y la fuerza del interés público, de lo universal contra lo particular, como un medio de construir una sociedad viable sostenida por una infraestructura de bienes y servicios colectivos que sirvieran de apoyo al impulso de todas las clases sociales, incluyendo obviamente a la misma oligarquía. A largo plazo, ésta se vería también beneficiada por este nuevo sistema de dominación en el que no arriesgaba tanto su prestigio y su bolsillo en la lucha por establecer el mando sobre toda la sociedad. Era preferible y quizás hasta más rentable, dejar pues que una dirigencia política educada y leal (aunque no incondicional) le manejara la res publica de modo si se quiere especializado. Podía así imprimírsele la fisonomía al Estado y a las políticas públicas de ser neutrales instrumentos para el gobierno de los hombres y las cosas, y hacer creer que respondían de modo general, abstracto e indivisible a las necesidades e impulsos de toda la sociedad, a lo universal por encima de lo particular, a lo racional por sobre lo arbitrario.

El General Guardia como gran retador de la oligarquía criolla, tuvo que labrarse desde el poder mismo su capacidad de sobrevivencia y de maniobra política. Para ello utilizó al elemento militar con cuyo apo-

yo incondicional contaba, a la administración misma que expandió a ni
veles sin precedentes favorecido por el auge de las exportaciones cafe
taleras que continuaban creciendo a pesar de algunas fluctuaciones pre
ocupantes, y se acercó a algunos financistas internacionales que ofre-
cieron emprestitos para el ferrocarril al Atlántico y suministrarle apo-
yo para silenciar a la oposición interna. Utilizando métodos un tanto
autoritarios, aunque enmarcados dentro de los principios de la Constitu
ción Política de 1871, pudo conducir a la administración pública hacia
nuevos y más elevados niveles de inversión en infraestructura de comuni
caciones y en obras públicas urbanas, lo que por otro lado exigió incre-
mentar las rentas del Estado, las que de todos modos venían creciendo
por la vía de los impuestos al comercio exterior de cuyo movimiento pa-
saron a depender irremediablemente con el transcurso del tiempo. Sin
embargo, el peso del pago de los empréstitos llegó a comprometer hasta
el 40% del presupuesto nacional y la obra fue drenando peligrosamente
las posibilidades financieras de un fisco que, entre los obstáculos a
su crecimiento, encontraba nada menos que el peso de los intereses priva
dos que a corto plazo resentían los impuestos y las demás obligaciones
que el gobierno contraía con el capital foráneo. Lo cierto es que por
esta vía pudo Guardia lograr una independencia notable frente a esos -
círculos oligárquicos y avanzar por medio de políticas públicas de desa
rollo que tuvieran más en cuenta las necesidades a largo plazo del -
país. Asimismo retrocedieron los localismos, al caer los municipios ba
jo el control financiero y los subsidios que les giraba el gobierno -
central, con lo que se llegaba así a una etapa culminante del proceso
iniciado por Carrillo y fortalecido por el ascenso de la oligarquía -

criolla, de verticalizar las estructuras de poder concentrañdolo en la ciudad de San José desde donde en efecto terminaron por manejarse todos los asuntos públicos sin que hubiera centros independientes de poder capaces de contrarrestar esta tendencia centralizadora y monopolizadora. Habrá que esperar a que a partir de 1890 tome auge el proceso de formación del "enclave" bananero y ferroviario que quedará en manos de la United Fruit Company definitivamente en 1899, para que surja un poder regional capaz de poner en entredicho o limitar el alcance del dominio estatal sobre el territorio y la población nacionales.

Mientras se densificaba el área cafetalera del Valle Central y el ferrocarril hacia el Atlántico permitía habilitar nuevas tierras hacia el Este, también se dieron importantes movimientos de población hacia el Oeste y las faldas de los volcanes, facilitados por las mejoras en la red de caminos y puentes. Sin embargo, la población siguió concentrándose en los núcleos que componían la jerarquía urbana que encabezaba la ciudad de San José seguida de Cartago, Alajuela y Heredia, los cuales se beneficiaron con las inversiones en infraestructura urbana que fomentó el gobierno de Guardia y que continuaron dándose con sus sucesores interesados en darle principalmente a San José una fisonomía de "ciudad burguesa" de finales de siglo, para lo cual hasta se copiaron sin mayor recato los estilos de la época, como sucedió con la construcción del Teatro Nacional. El marco urbano construido se incrementó notablemente y la división rural-urbana del trabajo permitió el surgimiento y ampliación de nuevos sectores sociales dedicados a atender diversos servicios. Pero los talleres artesanales que todavía antes de 1890 eran rentables, no pudieron competir más con las mercan-

cias venidas del exterior en algunos rubros. Después de esta fecha, aproximadamente, las políticas en extremo liberales del régimen, su excesivo "aperturismo", arruinaron muchas de esas actividades y el desarrollo del país quedó condicionado por una internacionalización cada vez mayor del mercado mundial y sus estímulos a veces positivos o tras veces críticos y contradiccionistas.

La deuda externa aumentó velozmente bajo el signo de los contratos y renegociaciones de los empréstitos ferrocarrileros, haciendo que los compromisos financieros del Estado en el exterior limitaran sus posibilidades de inversión en el plano interno, razón por la que las doctrinas del laissez-faire, laissez-passez, tan en boga a finales de siglo, encontraron un terreno muy propicio. El Estado Oligárquico-Liberal fue circunscrito a tareas de estímulo y promoción de las condiciones favorables a la reproducción del capital y la mano de obra, dejando que las fuerzas del mercado local e internacional determinaran libremente el rumbo de la economía. En cierto sentido el Estado se colocó detrás del ciclo comercial, contrayendo o ampliando sus actividades y los alcances de las políticas públicas, según se comportara dicho ciclo, para paliar el cual todavía no se habían diseñado las políticas intervencionistas y expansionistas que después de la Gran Crisis de 1930 con base en las indicaciones Keynesianas, se lograron definir e implementar en las economías centrales. A finales del siglo XIX y comienzos del presente, los instrumentos de la política fiscal, dependientes totalmente del volumen y el valor del comercio exterior, se movieron dentro de ecuaciones muy restringidas, descargando el peso de las crisis sobre los patrimonios de los sectores social y económicamente más débi

les y sin posibilidad real de enfrentar los pánicos periódicos con eficacia y decisión. Sin embargo, habrá que esperar a los años de 1930 para que estos instrumentos se muestren más inoperantes que nunca y para que el reformismo que propendía a un mayor intervencionismo y proteccionismo estatal pudiera contar con mejores y más evidentes argumentos para introducir controles directos en el libre juego de las fuerzas económicas que tanto respetaban los liberales, aunque en ocasiones tuvieran que lamentarse de las consecuencias.

Al despuntar el siglo XX la dependencia del país con respecto al binomio exportador café-banano era completa. Podríamos afirmar que la función esencial del Estado, luego de velar por el orden interno, era la de mantener el funcionamiento de toda la infraestructura que le permitía al capital cafetalero y bananero aprovechar en condiciones ventajosas la oferta de mano de obra y la evolución de los precios internacionales. No era que las políticas públicas se redujeran a ello, estrechamente. Políticas como la educacional, la de saneamiento ambiental y la construcción de obras públicas menores en diversas ciudades y poblados que venían a elevar el nivel de vida de las comunidades en general, tenían justificaciones más allá de su racionalidad económica inmediata y en algunas ocasiones eran combatidas por capitalistas que consideraban que se traducían en gastos más que en inversiones. La historia dará la razón a aquellos que consideraron estas erogaciones como verdaderas inversiones en desarrollo y seguridad política, porque así pudo la oligarquía dentro de los estrechos márgenes que imponían las concepciones liberales, satisfacer ciertas demandas de la población subyacente sin afectar por ello la tasa de ganancia de los capitalistas

que actuaban dentro de una economía que llegó por períodos a crecer a tasas superiores al 5%, que la colocaban entre las más prósperas del mundo y sobre todo del contexto agroexportador latinoamericano de ese entonces. El gasto público fue creciendo de ese modo y para los años 20 era perfectamente observable que había una serie de tareas que la administración pública había comenzado a asumir, por ejemplo, en el terreno de los seguros, la vivienda, los transportes, las telecomunicaciones, y la salud pública, que contradecían la tesis de que existía un Estado Liberal "puro" en el país. Se trataba de los primeros síntomas del reformismo y del intervencionismo que luego de la Gran Crisis, pasará al primer puesto en la orden del día, como medio de remediar los desequilibrios crecientes en que cíclicamente entraba la economía agroexportadora y producían con mayor frecuencia tensiones y conflictos sociales, que amenazaban con convertirse en luchas de clases. Organizaciones y movimientos sociales como el Reformismo, el Partido Comunista y diversos centros de pensamiento obrerista y nacionalista que aparecieron en los años 20 y 30 eran indicadores de que todo el aparato de la dominación oligárquica y sus políticas públicas se tornaban más ineficientes para atender las demandas y expectativas crecientes de una población que por períodos experimentaba las posibilidades de movilidad social ascendente, solo para caer luego, en los llamados "años de las vacas flacas", en la postración que cercenaban los márgenes del ingreso discrecional de importantes estratos sociales, en especial de los ubicados en las zonas urbanas.

Así las cosas, en los años posteriores a la Gran Crisis, se intentaron múltiples reformas de la administración pública y del fisco, así como de la organización y regulación bancaria, que hicieron pasar el Estado al primer plano en la conducción de la economía, sin que por ello absorbiera o maniatara totalmente a la iniciativa privada, las medidas se tomaban solo para establecer un poco el orden en el comportamiento anárquico y "corto-placista" de la misma. Las reformas del Dr. Max de 1936 fueron el mejor ejemplo del espíritu intervencionista que chocaba con el tradicional del liberalismo, erosionado por las prédicas del New Deal y de Keynes, y presionando desde abajo por los emergentes movimientos de masas. La administración del Lic. Cortés Castro fue la última administración típicamente liberal, pero aún en ella - las inversiones en obras públicas alcanzaron elevados volúmenes que hicieron que fuera bautizada con el nombre de la administración del "cemento y la varilla". Era un esfuerzo por revivir las técnicas y las políticas públicas del Estado Liberal proyecto al cual pondrá fin la situación interna provocada por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Se hacía cada vez más necesario que las políticas públicas atendieran las necesidades de sectores populares y de clase media que protestaban contra el orden establecido no solo por lo que en sí representaban, esas necesidades, sino porque de otro modo peligraba todo el edificio oligárquico y la seguridad interna de los principales grupos políticos y plutocráticos de poder. Estaban pues las condiciones dadas para la Gran Reforma de los años 40, que vino a introducir el primer gran viraje en el estilo de desarrollo del siglo XX costarricense.

A pesar de que las reformas municipales de 1909-10 impulsadas por el caudillo liberal Ricardo Jiménez, habían cumplido su meta de incorporar a la política electoral activa los gamonales de las zonas rurales, los efectos de dichas reformas no vinieron necesariamente a satisfacer las demandas de reforma, participación y más democracia en lo político y lo económico-social que blandían los emergentes sectores medios urbanos, a los cuales se unían los primeros contingentes de clase obrera producto de la diferenciación interna del régimen agroexportador y oligárquico. La gravitación de estas fuerzas aumentó en los años 30 y ya para la década siguiente aparecen organizadas en la palestra política, sea apoyando el populismo gubernamental del Dr. Calderón Guardia apuntalado por el Partido Comunista y la Iglesia Católica, sea oponiéndose al mismo en aras de una crítica social-demócrata que considera a la administración pública y a sus políticas de seguridad y bienestar social como una prolongación por medios demagógicos, del oligarquismo y la corrupción tradicionales. Ciertas desviaciones anti-democráticas del gobierno en materia electoral y los crecientes avances de la dirigencia comunista en un clima que después de 1945 era de manifiesta Guerra Fría, introdujeron mayores tensiones en el medio nacional, fomentaron una agudización de los choques intersectoriales y evidenciaron la imposibilidad de contrarrestar adecuadamente la inflación, la crisis fiscal y los desbalances del comercio exterior provocados por la guerra. Una corta guerra civil en 1948 llevó finalmente a un cambio de gobierno con apoyo de fuerzas extranjeras de la Legión Caribe y la venia del Departamento de Estado, y se inauguró un largo período de reformismo social-demócrata cuyas características examinaremos con más de -

talle en los párrafos siguientes.

En primer lugar se acusaba al gobierno derrocado de contubernio con los comunistas, lo que según los social-demócratas y los capitalistas de la oposición, implicaba que las políticas sociales estaban viciadas de ciertos contenidos extra-nacionales y de oscuros objetivos que sólo se cumplirían si se daba un cambio revolucionario que desplazara del poder a la burguesía local y le cortara sus nexos con el capital foráneo al cual había tenido que recurrir para fortalecerse en el plano interno frente a otros sectores en ascenso.

En segundo lugar, los dirigentes de la social-democracia señalaban que el gobierno no podría plantear ante el país un programa de rectificaciones sustanciales del esquema económico del antiguo liberalismo que abriera las puertas a un desarrollo basado en la diversificación agrícola, la mayor ingerencia del Estado en las cuestiones de índole económico-social, la ampliación de las clases medias democráticas y una posición más nacionalista frente a ciertos intereses extranjeros cuando estos se presentaran para reforzar el antiguo estado de cosas. Las quejas iban en el sentido de que se había abusado de las políticas de redistribución secundaria de los ingresos, pero que a nivel de la producción no existía una tesis clara ni la suficiente decisión de variar las cosas más allá de lo que permitieran los intereses tradicionales que en el siglo XIX habían sido progresistas, pero que ahora se congregaban en el campo de la reacción.

Incapaces de ofrecer soluciones a los problemas del país que giraban no sólo alrededor de la famosa "cuestión social" sino también alrededor de cómo levantar la producción y diversificarla, los dirigentes gubernamentales del llamado "régimen de los 8 años" caían efectivamente de continuo en la improvisación y la ambivalencia, movilizándolo a las masas contra sus enemigos, pero frenándolas cuando podían atentar contra el status quo o cometer "excesos". Se reflejaba en esto la composición heterogénea del grupo dirigente y su carácter si se quiere neo-oligárquico, en el sentido de que la mayoría de las reformas sociales tenían como finalidad restaurar con algunas variantes cierto equilibrio perdido y fueron más que todo de índole legal o formal, lo que no significó que con el paso del tiempo no adquirieran vigencia. Mientras se reajustaba el sistema oligárquico desde arriba con matices populistas, en la base social, los comunistas nacionales lograban sustanciales avances que atemorizaron tanto a los círculos oligárquicos como a las clases medias en ascenso. Pero ni aquéllos ni los sindicatos eran lo suficientemente fuertes como para pesarse más en la toma de decisiones dentro de los escalones más altos de la administración pública que permanecieron bajo control de la camarilla que rodeaba al Presidente y a sus ministros y consejeros más cercanos. Bajo tales condiciones en que reinaba el nepotismo, el clientelismo y la corrupción, se fue produciendo una crisis de consenso y un cierto vacío de poder que fue aprovechado por los social-demócratas y por los más conspicuos capitalistas, para desestabilizar al gobierno y bloquear sus políticas en múltiples terrenos.

En marzo de 1948 estalló la revuelta jefada por José Figueres quien

una vez triunfante se dedicó durante 19 meses a introducir importantes reformas en el aparato estatal entre las cuales se cuentan la estatización de la banca, un impuesto temporal al capital del 10%, nuevos estímulos a la producción y sobre todo la creación de numerosas instituciones que al promulgarse la Constitución de 1949, formaron el régimen de los organismos descentralizados o autónomos. Este programa prosiguió cuando Figueres y su grupo retornaron al poder en 1953, inaugurando definitivamente un largo período de reformas bajo el signo de políticas públicas desarrollistas y de subsanar las fallas y debilidades de la empresa privada.

Fue también bajo ese signo que se introdujo el problema a resolver de la industrialización como complemento del sistema agroexportador y eje de los procesos de urbanización y burocratización que servirían para continuar estimulando el ascenso de las clases medias urbanas en alianza con las de los medianos y pequeños productores del campo. Conforme fuera surgiendo un empresariado local innovador y de mentalidad moderna, se pensaba que se integraría a esa alianza desarrollista de gran peso electoral. Era por esta razón indispensable institucionalizar y perfeccionar los mecanismos del sistema electoral a fin de que existiera un juego político pluralista dentro del cual la oligarquía tradicional amparada al periódico "La Nación", pudiera seguir midiendo sus fuerzas en un clima competitivo y de amplias libertades públicas. A través de los restos del "calderonismo" esta oligarquía podía mantener sus vínculos con ciertos sectores de clase trabajadora beneficiada por las reformas laborales y el régimen de la seguridad social. Indiquemos que estas reformas no fueron abolidas en 1948 por los social-demócratas, sino más bien fueron incorporadas bajo el

esquema de dominación de la nueva amalgama de sectores medios en ascenso que por esa vía hallaron novedosos medios para fomentar el clientelismo a nivel de las clases trabajadoras, acostumbradas de por sí al paternalismo como estilo de subordinación tradicional.

Tales fueron en síntesis las condiciones histórico-sociales fundamentales bajo las cuales emergió el Estado Capitalista-Benefactor de la posguerra en Costa Rica, y se pudieron diseñar e implementar las políticas públicas del desarrollismo. En la década del 50 se introdujeron y fortalecieron nuevas instituciones encargadas de atender múltiples necesidades colectivas y de la clase capitalista, la cual era incitada a diversificarse, en función tanto de las posibilidades de un modelo industrial sustitutivo de importaciones que a partir de 1963 fue posible implementar parcialmente dentro de las posibilidades del Mercado Común Centroamericano, como sobre todo a base de las innumerables oportunidades que desde el mismo Estado se abrían internamente a granel para fomentar el consumo y la movilidad de las clases medias educadas y altamente burocratizadas que se amparaban bajo el alero de una administración pública en plena expansión. No hay duda que entre los fenómenos más decisivos de la época se observaron estos dos: de la industrialización protegida dentro de las regulaciones del mercomún centroamericano y de la creciente importancia del Estado y sus políticas como motores del crecimiento económico tan acelerado que se logró hasta fecha reciente en el país. Analicemos seguidamente algunos aspectos de ese proceso porque condujo en la década del 70, al surgimiento del llamado Estado-Empresario como variante del Estado-Benefactor. Encargado de regular la relación capital-trabajo, este último

estimula directamente el crecimiento y el reparto de los excedentes económicos de la sociedad en búsqueda de un equilibrio de clases que responda lo más posible a un modelo de igualdad de oportunidades, movilidad social ascendente y Estado de Derecho heredado del liberalismo. El Estado-Empleador va más lejos en sus intervenciones, como trataremos de ilustrarlo en breve.

Antes señalamos algunas características del Estatismo de posguerra que conviene guardar en mente para explicar las transformaciones que sufren las políticas públicas en un cuadro cambiante de intereses de clases y de fracciones de clases.

A raíz de la crisis de 1930 el país entró en un período de estancamiento económico, a raíz del descenso del comercio exterior, las posteriores dificultades de la guerra externa e interna, y la necesidad de combatir el desempleo y las crisis fiscales periódicas con medidas inflacionarias. Bajo tales condiciones y dada la pequeñez del mercado interno, no hubo como hubiera sido de esperar procesos de sustitución de importaciones importante a lo largo de ese período, es decir, no se produjeron cambios estructurales o modernizadores en la economía y la sociedad como en todo siguió dependiendo irremediamente de las posibilidades que ofrecía el modelo agroexportador, a pesar de las políticas redistribucionistas que matizaron el período de las Reformas Sociales de los años 40 y la incorporación mayor de las clases medias y trabajadoras al sistema político electoral. Lo que sí produjeron esas reformas y la creación de instituciones para implementarlas, fue un intervencionismo mayor del Estado

en la vida nacional, papel que ya se venía perfilando desde los años 20 con la creación de instituciones y la fijación de políticas regulacionistas, tales como, entre otras, la estatización de los seguros en 1924, la creación del Instituto de Defensa del Café en 1933, los profundos cambios en el régimen bancario y monetario de 1936, la legislación sobre salarios y protección laboral que se fue introduciendo en esos años, y los intentos por institucionalizar el sistema de los partidos políticos. A la par de estos resultados, o mejor dicho, como poderosa fuerza impulsora de los mismos, observamos un agresivo movimiento de ascenso de clases medias interesadas en compartir el poder con la oligarquía tradicional e influir en la dirección de las políticas públicas en un sentido desarrollista.

El desarrollismo se basó fundamentalmente en esas Reformas Sociales y, en las posibilidades que, a una emergente coalición de clases medias y fracciones empresariales nuevas, ofreció después de 1948-49 el sistema bancario estatizado, la proliferación de instituciones autónomas creadas para satisfacer necesidades de vivienda, bienestar y seguridad social, estabilización de precios, electricidad, educación pública y salud. También las reformas internas que se realizaron en los ministerios y demás instituciones heredadas del período liberal, conducentes a reajustarlas en función de nuevas necesidades, contribuyeron a estimular el ascenso de la coalición a fortalecerla frente a los círculos oligárquicos tradicionales, y a abrir el proceso de industrialización como medio de modernizar la estructura económica, elevar la productividad del trabajo e incentivar los procesos de movilidad social. Todo lo cual tuvo a la vez como plataforma y como consecuencia fácil de prever, la ampliación del aparato esta.

tal.

En efecto, como resultado de un elevado crecimiento anual de la economía que llegó al 7.6% entre 1951-57, el número de empleados públicos pasó de 17.000 a 30.000; el valor agregado del sector público se movió de un 11.5% a un 13.5% del producto interno bruto; la contribución estatal a la formación de capital creció de un 2.4% a un 4.7% del mismo; la cuota en términos de la inversión total varió de un 14% a un 28%; y los gastos en renglones como educación, salud, energía y transportes se duplicaron saltando de un 25% a un 30% dentro del total de los gastos públicos. No hay duda que estas cifras son reveladoras del profundo cambio acaecido en tan corto tiempo. Cuando los altos precios de las exportaciones comenzaron a bajar entre 1956-62, la crisis fiscal pasó entonces de nuevo a la orden del día después de un largo período de posguerra en el cual el valor de las exportaciones casi se triplicó, dándole al Estado abundantes recursos para la inversión y el estímulo del empleo. Pero, al detenerse la expansión del sector externo de la economía, esa coyuntura llegó a su fin. Fue cuando definitivamente quedó en claro una vez más que debía enfrentarse la vulnerabilidad y dependencia externas de la economía con políticas públicas que ensancharan el mercado interno y a través de la industrialización que paulatinamente se venía produciendo desde dos décadas atrás. Para ello se aprobó en 1959 la "Ley de Protección y Desarrollo Industrial", se dieron los pasos definitivos para ingresar en 1963, al Mercado Común Centroamericano y, a los recursos propios para la industrialización, se añadieron ahora los estímulos al capital extranjero que no tardó en afluir cuantiosamente. Por tanto, a diferencia de otras crisis o contracciones

económicas anteriores, en esta ocasión el Estado costarricense ya tenía poderosos instrumentos fiscales, monetarios y de inversión en sus manos como para enfrentar la situación, movilizar recursos cuantiosos en la persecución de nuevas metas y adquirir por esa vía una preponderancia insospechada como motor del crecimiento económico y de la distribución de los ingresos. Cualquier fuerza social o política que aspirara a tener influencia nacional y hasta regional, no podía de ahora en adelante obviar la búsqueda del apoyo del Estado, de sus aparatos y sus finanzas, y el emergente empresariado nacional no fue en absoluto la excepción a esta norma. El centralismo y el clientelismo políticos quedaban así visiblemente fortalecidos a raíz de este papel del Estado, que le daba virtual dominio sobre los procesos de acumulación de capital y de la distribución nacional de los ingresos y demás beneficios del crecimiento económico, el cual después de 1961-62 logró recuperar su anterior dinamismo.

Los indicadores económicos muestran cómo por toda una década hacia adelante se obtuvo un crecimiento alto del 7.1% anual basado en la ampliación de las exportaciones de café, banano, ganado y azúcar, y principalmente de las de origen industrial que pasaron de representar el 5.6% del total en 1962 al 27% en 1974, mientras la participación del sector industrial como tal se movía de un 14% a un 20% del producto nacional bruto, en condiciones de elevado proteccionismo que como veremos llegará a constituir un severo problema más adelante. Pero en esa década el "boom" del sistema era evidente y vigoroso, y nadie pensaba en introducir correctivos a problemas que se vislumbraban tales como la extrema

concentración, vulnerabilidad y dependencia externa del proceso industrial no sólo en cuanto a mercados sino principalmente en cuanto a fuentes de capital, tecnología, insumos, "know how", etc. factores que incidían desde entonces negativamente sobre la balanza de pagos, la cual tuvo que ser equilibrada parcialmente por medio de un fuerte endeudamiento externo público y privado. También surgieron incógnitas sobre la propiedad y control del parque industrial, para no mencionar las presiones consumistas, que tanto contribuyeron a incentivar los medios de comunicación y las facilidades crediticias del comercio importador. La misma expansión del sector público era preocupante, pues el número de empleados públicos ha -
bía pasado de 36.000 en 1962 a 87.000 en 1973, es decir de un 10% del total de empleados en el país, llegaron a constituir un 15%, cifra que llegará cerca del 18% cinco años después. No es de extrañar que de pagar sólo un 25% del total de los salarios en 1962, el sector público llegara a cubrir el 35% en 1973 y el 39% en 1978, revelando así el poder empleador y remunerador que habían adquirido las instituciones del mismo bajo el aguijón de la expansión del gasto y el consumo y mucho menos debe sorprender que el conjunto de los empleados públicos se tornara durante este período en sí una fuerza política capaz de ejercer considerable presión y de contribuir independientemente al expansionismo intervencionista del Estado haciéndolo parte de su esquema de "intereses creados". Por supuesto que, además de los empleados públicos, es indiscutible que las nuevas fracciones del empresariado nacional, estuvieran o no sujetas al control o respaldo del capital extranjero, dependieron también fuertemente del respaldo, las concesiones, garantías, privilegios, etc. que hallaran en las oficinas públicas. Y esto es equivalente a decir en los

partidos políticos mismos, que se encargan de distribuir los puestos y las influencias en esos niveles a cambio de apoyo electoral por parte de poderosos sectores de la clase dominante costarricense y extranjera. Sectores enteros del "empresariado político" no hubieran podido levantarse por sí mismos durante esta década ni después, si no hubieran contado con accesos muy directos y especiales a fuentes de financiamiento y facilidades de operación dentro de la administración pública en sus más altos niveles, y se incluyen entre estos sectores a algunos de gran peso como los ganaderos, los bananeros y los industriales de nuevo cuño. Fue en estos sectores donde encontraron apoyo y legitimación para su proyecto estatizante, los tecnócratas, burócratas y dirigentes políticos, (profesionales y no-profesionales) que dominaron la escena de la toma de decisiones en el aparato estatal, evidenciando desde allí la alta cuota de poder e influencia de la que se habían apoderado, a pesar de las quejas que contra ellos y su prepotencia levantaban los líderes de las fracciones más tradicionales o "puras" de la empresa privada apegadas al liberalismo decimonónico.

Se fue formando de ese modo una nueva amalgama de sectores y de intereses creados dominantes, una especie de nuevo Establishment cuyas pugnas por la asignación de recursos públicos fueron la nota sobresaliente de las dos décadas siguientes hasta que la crisis actual vino a crear ciertas rigideces y a estimular la aparición de fricciones de otro tipo que han determinado, entre otras cosas, un resquebrajamiento de los mecanismos del consenso, un relativo vacío de poder y los primeros síntomas de una transición crítica de la "lucha de clientelas" a la "lucha de clases", en una suerte de etapa más aguda de esas pugnas acostumbradas

por la distribución de los excedentes. Sin embargo, mientras la economía siguiera creciendo aceleradamente y la inversión pública y foránea pudiera respaldar los planes optimistas de inversión, la belle époque del Establishment desarrollista pudo darse sin problemas y la social-democracia logró prosperar electoralmente por dos períodos consecutivos (1970-78) mientras la oposición veía frustrados sus anhelos de retorno al poder refugiándose en denunciar el plan desarrollista de "corrupción", de atentar contra los cánones de una economía normal de mercado, y ante todo de cometer excesos fiscales y crediticios que darían al traste eventualmente con todo el edificio reformista-benefactorista.

Durante la administración Figueres (1970-74) se siguieron en líneas generales las tendencias estatistas que ya se habían experimentado en su administración anterior. Sólo que ahora se comenzaron a percibir los primeros nubarrones de una crisis general del capitalismo, tanto "central" como "periférico", así como los indicios de un proceso inflacionario interno estimulado por las primeras alzas en los precios de los combustibles y de las importaciones. Pero, valiéndose de algunos "shocks" crediticios e inflacionarios adicionales, esta administración pudo llegar a su fin, en medio de un inquietante clima social. Se trató del nuevo panorama promovido por la aparición de nuevas organizaciones políticas y sindicales de izquierda y en general por una mayor presencia de masas de trabajadores resultante del proceso mismo de desarrollo de las fuerzas productivas alcanzado durante el período en algunas "áreas de inversión" claves en el sector industrial y público de infraestructura y nuevos servicios. Asimismo se podía observar un incremento de los gastos más pater-

nalistas, autoritarios y reaccionarios del estilo figuerista de ejercicio del poder. Todo parecía indicar que contradecían tendencias del largo proceso de "democratización fundamental" que se venía dando desde décadas atrás vía una notable participación electoral de masas y una serie grande de presiones en favor de la redistribución "hacia abajo" de los ingresos.

Llamó la atención en ese momento la respuesta desmesuradamente represiva en contra de los movimientos campesino, obrero y estudiantil, con la que se intentó contener los cambios sociales, muchos de ellos promovidos por la misma expansión del Estado y las políticas redistribucionistas que movilizaron a las clases medias, cuyo proyecto precisamente comenzó a ser cuestionado cuando asomaron a principios de 1970 los primeros indicadores de desacomodos y tensiones en los procesos de la acumulación de capital y de distribución de excedentes. Nos referimos a ciertas manifestaciones de agotamiento del crecimiento industrial de la década anterior, a los problemas de la balanza de pagos, y a la crisis fiscal, que se hicieron presentes con alguna gravedad desde el punto de vista de que amenazaban con interrumpir la reproducción ampliada y progresiva de los capitales que se había inaugurado en beneficio de los sectores medios y más privilegiados de la clase obrera, para interponer en su lugar las tendencias de una reproducción limitada y regresiva en favor de los sectores económica y socialmente más poderosos y privilegiados. Frente al consumo ampliado de las masas, algunos círculos empresariales que rodeaban al presidente Figueres comenzaron a plantear la necesidad de estimular y acelerar las inversiones privadas, con lo que comenzaron a tener dificultades quienes aspiraban a que el frágil conjunto de alianzas que sostenían al

Establishment desarrollista, pudiera continuar sin sufrir redefiniciones importantes a corto o mediano plazo. Pues, mientras unas fuerzas iniciaron redobladas presiones en favor de una creciente participación y redistribución "hacia abajo", otras también asociadas estrechamente al poder político, forcejearon duramente para obtener una concentración y centralización económica "hacia arriba" que robusteciera a la burguesía en su conjunto y en particular a los sectores ligados a la industria y la exportación, es decir ligados más estrechamente al capital extranjero en sus diversas formas legales e ilegales (caso Vesco, por ejemplo). Esto implicó que hubiera un sector empresarial que luego se volvió completamente en contra del esquema desarrollista del Estado-Empresario de la administración siguiente que al caracterizarse por tener sus intereses entremezclados con los del capital privado foráneo, encontraba ya muy incómoda su posición dentro de la alianza que se había desarrollado desde años atrás con relativo éxito. Hubo síntomas, aunque menos intensos, de que los sectores medios vieron también con preocupación un incremento del poder de presión y negociación de amplios sectores de la clase trabajadora, cuya presencia se había incrementado dentro de la nueva estructura social del trabajo introducida por la industria y las inversiones tan cuantiosas en infraestructura de apoyo al capital, que se venían realizando desde el sector público. Recordemos que fue por esta época que se legalizó la participación electoral del Partido Comunista de Costa Rica.

Muchas de estas tensiones apenas si se perfilaron y afloraron a la superficie a principios de la década del 70; pero desde el punto de vista sociológico, es innegable que se hubieran agudizado tanto en el agro como

en las ciudades si la administración del Presidente Oduber no hubiera introducido una serie de medidas paliativas encaminadas a intensificar el intervencionismo estatal en los procesos de acumulación, bajo la fórmula esta vez del Estado-Empresario que asumiría directamente tareas en ese campo en clara competencia con el sector privado. En un afán por dinamizar a éste último eventualmente, y por cumplir tareas progresistas en la preservación de la alianza desarrollista que constituía la base social del proyecto reformista en su conjunto, las metas fijadas por la administración que se estrenó en 1974, estuvieron dirigidas a reactivar el proceso de acumulación por una parte y por otra, a revitalizar -o al menos prolongarle la vida- al esquema benefactorista de distribución, transfiriendo para estos efectos recursos monetarios masivamente hacia el sector mediano-pequeño productor, "marginal" o pobre de la población, y modificando el esquema productivo a base de la formación de grandes empresas estatales en sectores motrices del desarrollo.

En cuanto al lado distribucionista de las políticas públicas, fue llamativo durante la administración Oduber el esfuerzo por universalizar los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esta cubría un 20% de la población económicamente activa a finales de los años 40, un 27% en 1961 y para 1975 había llegado a la cifra récord de un 57%, y de allí continuó avanzando hasta 1984 cuando se extendió la cobertura hacia los grupos indigentes y el resto de la población rural. Asimismo, la idea original del Presidente Figueres de lanzar un Programa de Asignaciones Familiares fue concretada con importantes modificaciones, basándose en alrededor de 13 programas que iban desde comedores escolares hasta acueductos

rurales, implicando en síntesis el mayor esfuerzo redistribucionista emprendido desde los años 40 en el país que hoy día se acerca a la suma de 900 millones de colones al año. El esfuerzo se completó con la aplicación de una política de incentivos a la producción agropecuaria, dentro de la cual destacó el Programa Nacional de Granos Básicos, así como la compra de fincas a terratenientes para impulsar las llamadas "zonas de desarrollo" del ITCO, donde se les ofreció a los campesinos independientes facilidades de infraestructura y servicios a fin de disminuir la intensidad de los conflictos agrarios y el precarismo. De esta manera se renovaba el compromiso populista, particularmente en las zonas rurales, ya que más bien los sectores medios y acomodados de las ciudades sufrieron restricciones en el consumo, sobre todo de bienes importados, y por esa razón resistieron estas y otras redistribuciones de recursos en favor del agro, lo que se reflejó probablemente en el resultado electoral negativo que en estas áreas obtuvo el partido de Oduber en las elecciones de 1978.

Pero lo más sobresaliente de la administración oduberista fue la extraordinaria expansión del papel del Estado en las esferas de la producción de bienes y servicios públicos, con la creación de grandes empresas estatales financiadas por la Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA), la que pasó a ser el puntal de este proceso bajo el argumento de que el capital privado nacional no podía o no deseaba invertir en ciertas áreas estratégicas del desarrollo que tampoco convenía poner bajo el control de las compañías multinacionales. Las condiciones estaban maduras para un proyecto así, pues el sector público había crecido enormemente y multiplicado sus instrumentos intervencionistas y reguladores del

conjunto de la economía costarricense, lo mismo que su capacidad de endeudamiento externo, el cual durante el período llegó a niveles altísimos en vistas del esfuerzo enorme para financiar las grandes inversiones requeridas por el proyecto del Estado-Empresario.

A fin de comprender exactamente las causas e implicaciones de dicho proyecto, es conveniente revisar algunas de las tendencias de la economía, en especial las centradas alrededor del comportamiento de la inversión pública y la formación de capital en el país.

Entre finales de la década del 40 y el inicio de la del 70 la inversión privada se mantuvo bastante estable en alrededor de un 12-13% del valor del producto interno bruto; pero la pública saltó de un 15% a cerca del 30%, notándose que el subsector de las empresas públicas propiamente pasó a contribuir con un 28% del total del aporte del sector público a la formación de capital, para llegar a un 44% durante la administración Figueres y a casi un 50% durante la de Oduber.

Durante la década del 70, la inversión privada elevó por su lado, la participación en la formación de capital de un 13% a un 15%, notándose su concentración en la industria, la construcción, los transportes, y la vivienda y su retiro de la agricultura donde el porcentaje de participación dentro del total correspondiente al capital privado, bajó alarmadamente de cerca de un 20% a un 10%, lo que se tradujo en un estancamiento del sector agrícola que se observa en que redujo su tasa de crecimiento que era de un 5.8% entre 1962-72, a sólo un 2% entre 1972-76. Más lo importante es que la inversión privada comenzó a contraer su tasa global de crecimiento a partir de 1975, lo que llevó inmediatamente por

otra parte a incrementar la participación estatal en los procesos de formación y acumulación de capital, como medio de compensar esta coyuntura y de abrir nuevas posibilidades de una recuperación en donde el sector empresarial pudiera re-entrar al proceso comprando las empresas públicas de CODESA. Debe observarse también que al mismo tiempo declinó el índice de la actividad industrial desde cerca de un 10% anual a una tasa ligeramente por encima del 6% a partir del año 1975. Y en general la tasa de crecimiento anual del producto descendió de un 7.5% a un 5.5% en ese período. Es decir, se trataba de una contracción que obedecía no sólo a factores internos sino también posiblemente al desenlace de la crisis mundial capitalista, ya en pleno desenvolvimiento.

Fue tal el contexto en que hizo su aparición salvadora el Estado Empresario y en que se fortalecieron temporalmente sus bases sociales, en particular la tecno-burocracia pública y algunas fracciones del empresariado nacional muy ligadas al poder político que recibieron incentivos y concesiones especiales. Fue también la coyuntura en que otras fracciones del capital y las clases medias más vinculadas a la empresa privada nacional y extranjera arrecieron su oposición basada esencialmente en la acusación de que el Estado-Empresario y sus protagonistas eran "corruptos" y que era necesario transitar por la senda del "progreso con dignidad". Sin duda alguna, el periódico "La Nación" fue el orquestador primordial de esa campaña que eventualmente lograría en 1978 erosionar las filas electorales del Partido Liberación Nacional o al menos impedir que se incrementaran lo suficiente como para detener a la amplia coalición de fuerzas conservadoras y neo-liberales que terminaron agrupándose en el Parti-

do Unidad y llevando a la presidencia a Rodrigo Carazo. La principal pro mesa de esta oposición tan poderosa era desmontar el engranaje del Estado-Empresario y Benefactor, tales eran los excesos que se le atribuían.

La oposición al proyecto oduberista era en parte explicable por el marcado cambio en la orientación de la inversión pública que implicó el viraje de la política estatal del período. En efecto, hasta el año 1975, la inversión pública llegaba apenas a un 27-28% del producto interno; pero a finales de la administración Oduber no sólo había subido a un 37%, sino que había cambiado de destino. Pues la inversión estatal en empresas públicas productivas que llegaba a un 2.8% del total del sector público en 1975, se elevó precipitadamente a 30.0% en 1978, mientras descendía la inversión en infraestructura social y servicios (educación, sa lud, vivienda, etc.) de un 23.4% a un 9.8%. En cuanto a telecomunicaciones y energía se notaron aumentos, aunque en general las inversiones en infraestructura se mantuvieron entre esas fechas fluctuando alrededor del 56%, lo que por supuesto no es una cifra despreciable e indica que no se abandonaron del todo las funciones tradicionales del Estado inter vencionista en el refuerzo de las condiciones de reproducción y acumulación del capital. La queja de las fracciones anti-oduberistas de la cla se dominante provenía de la tesis de que el Estado-Empresario con esa distribución de sus inversiones atentaba contra los intereses de la empresa privada restándole campos de inversión propicios, compitiendo deslealmente e incrementando enormemente los poderes de la tecno-burocracia pública que no podía considerarse totalmente leal y apegada a los principios de defensa de la libertad de empresa, de la propiedad privada y del

mercado. En otras palabras, levantaba un poder amenazante con alta capacidad de reproducirse e institucionalizarse, sobre todo si llegaba a dirigirse en detrimento de los intereses empresariales y capitalistas más puros, a los partidos políticos y demás organizaciones claves en la organización de la hegemonía de toda clase dominante. El temor era que la creciente autonomía del Estado se convirtiera en una fuerza incontrolable que terminara por absorber o maniatar a la empresa privada y cortara importantes nexos con el capital transnacional, o al menos le bloqueara a este ciertas áreas de inversión en un giro nacionalista. También creaba gran tensión que se hicieran más intentos de seguir financiando la industrialización y los proyectos del Estado-Empresario a costa de los recursos del sector exportador, por lo que los grupos tradicionales, entraron también en el movimiento opositor aspirando a corregir una política fiscal y monetaria que les generaba profundas ansiedades en momentos cuando se preveía -después del auge cafetalero de 1976-77- un nuevo y creciente deterioro de los términos del intercambio. Mientras tanto los sectores medios urbanos se inclinaban en contra del nuevo estilo desarrollista en la medida que habían perdido su antiguo dinamismo, especialmente en el sector privado y en el público topaban con algunas dificultades para hacerse de más recursos y poderes. La insistencia del Presidente Oduber en que se diera una neta filtración hacia abajo de las inversiones y gastos sociales nuevos, hizo que amplias capas medias vieran con recelo sus políticas de redistribución, particularmente la de asignaciones familiares, con respecto a la cual fue radical la decisión de iniciarla primero en las zonas rurales de más bajos ingresos a fin de disminuir la posibilidad de que se apoderaran de ella los estratos medios burocráticos para ampliar su consumo y mejorar

sus posiciones relativas dentro del aparato estatal y la sociedad. Tales fueron en síntesis las condiciones en que se desarrolló el proceso electoral de 1978 y se llegó a un relevo del equipo gobernante protagonista de la gesta del Estado-Empresario. Era relativamente fácil también inclinar a amplios sectores populares del electorado en favor de la nueva alianza de fuerzas neo-liberales que habían comenzado a predicar la necesidad de un retorno a las formas más puras del capitalismo competitivo-empresarial en detrimento del estatismo y el paternalismo. Para ello se utilizó una hábil propaganda moralista y el señalamiento de la inconveniencia del continuismo social-demócrata y los peligros de la "corrupción". El candidato de la llamada coalición Unidad, puso su carisma y fogozo discurso al servicio de dicha causa, desplegando en ello una eficacia extraordinaria que contrastaba con el bajo relieve del candidato que se le enfrentaba, que no halló mensaje ni fórmula programática que presentar al electorado, dando la sensación de que su partido se había agotado electoralmente hablando y quizás en cuanto a capacidad de elaborar un nuevo proyecto histórico y político.

Con el ascenso al poder de la coalición de Unidad sobre la base de un planteamiento neo-liberal con tintes de social-cristianismo conservador, se entró en una nueva etapa de la crisis que se venía gestando durante los años 70, en la cual se combinaban el languidecimiento de la industria y de la agricultura, con un proceso inflacionario a duras penas controlable, que se compensaba con un fuerte endeudamiento externo más allá de toda precaución. En parte los elevados precios del café en los años 76-77 previnieron por corto tiempo el anticlímax. Pero al entrar dicha

coalición al poder, dejó que bajaran las reservas monetarias, "flotaran" las tasas de interés y los precios internos, así como procedió a liberalizar el comercio exterior, hasta caer por esa vía en una devaluación monetaria que de hecho bajó el valor del dólar con respecto al colón de 8.60 a oscilaciones entre 20-25,0. Una contracción crediticia seguida de múltiples presiones inflacionarias encaminadas a respaldar un ritmo elevado de gasto público deficitario, vinieron a agravar más el cuadro contradictorio con que la nueva administración pretendió inaugurar un "nuevo modelo" de desarrollo económico recuperando para el capital los grados de supuesta libertad perdidos a manos del Estado-Empresario. Lo curioso es que muchos de los rasgos de éste siguieron adelante mientras se le atacaba en retórica; se alababan las bondades del neoliberalismo y se buscaba acelerada y desesperadamente la ayuda del Fondo Monetario Internacional para acompañar la crisis. Pero los efectos galopantes de este se hicieron pronto sentir sobre las tasas de ocupación, la estabilidad empresarial (especialmente en el sector industrial que se vio abruptamente desprotegido) y las inversiones, todo lo cual se proyectó hacia una caída abrupta de la tasa de crecimiento del PNB desde un 3.3% en 1979 a cerca de 0.0% en 1981, con tendencia a bajar aún más como resultado de la paralización de las inversiones productivas y las consecuencias de lo que indudablemente es una bancarrota financiera sin precedentes en la historia del país.

Mientras la deflación-inflación hacía estragos tanto en la economía como en las finanzas públicas y privadas (con excepción de aquellas del sector financiero privado), la coalición de Unidad se fue desintegrando y

el sistema político se volvió completamente inoperante para manejar la crisis y buscar salidas viables. La Asamblea Legislativa no ha podido detener ni compensar la incoherencia y arbitrariedad de las medias económicas del Presidente, quien se ha refugiado en un decreto en claro detrimento del ordenamiento legal y constitucional, y principalmente de los mecanismos que tradicionalmente habían garantizado la estabilidad política del país. Los primeros brotes de terrorismo han añadido un grado más de incertidumbre y preocupación a un inestable ambiente nacional. No vamos a entrar ahora en detalles sobre experiencias que, sin tener por el momento el ingrediente del militarismo, son muy recientes y se asemejan a las ya vividas por países del Cono Sur que experimentaron con el neoliberalismo de los Friedmán y sus Chicago Boys. Baste señalar que no se ha logrado enmarcar la economía y la sociedad dentro de "modelo" nuevo alguno y más bien se ha entrado en una situación donde deliberadamente el Estado y quienes lo manejan han perdido control sobre el comportamiento de la economía y se han transformado ellos mismos en promotores y ejes de la crisis en sus diversos niveles, incluyendo el político. Solo la falsa e ingenua creencia de que un cambio puramente electoral vendrá a arreglar el estado caótico de cosas y a garantizar una recuperación milagrosa, una especie de "nuevo amanecer" a partir de febrero o mayo del año entrante (1982), ha posiblemente contribuido a contener la protesta social y popular generalizada y a prevenir el desenlace de acontecimientos sumamente violentos y graves. La pregunta importante es: ¿cómo se explica sociológicamente todo este viraje tan repentino y espectacular?

Lo primero que debemos descartar es que se trata de una crisis prin-

principal o exclusivamente venida del exterior, producto de la stagflation de las economías capitalistas avanzadas. Lo más importante ha sido la crisis de hegemonía interna, donde se rompió momentáneamente la gran coalición de burguesía y clases medias que sostenía al desarrollismo tal como lo hemos descifrado, sin que sector o fracción alguna de clase haya podido imprimirle una dirección definida, coherente y distinta al resto de la sociedad. Un vacío de poder y consenso se ha instaurado como resultado de ese proceso con consecuencias imprevisibles. Y en la determinación de ese fenómeno han jugado un papel decisivo las contradicciones internas de los intereses y las políticas públicas que conformaban la estrategia del Estado-Benefactor y Empresario.

Si observamos esa estrategia observamos que funcionó holgadamente mientras el sector agroexportador y las fuentes externas de financiamiento aportaron los recursos para el crecimiento industrial y los grandes proyectos del Estado-Empresario. Hubo suficientes excedentes económicos como para distribuirlos dispendiosamente entre los empresarios y los sectores subordinados de las numerosas clientelas electorales que pugnaban por asignárselos como pago a sus contribuciones dinerarias o a sus votos en las campañas electorales. Las esferas de influencia se podían entonces ensanchar y los "empresarios políticos" unidos a los altos jefes del vasto aparato estatal, encontraron amplia acogida para sus solicitudes de crédito y de concesiones, muchas de ellas onerosas para el fisco, pero eficaces para apuntalar la inversión de los capitales privados que amenazaba con decaer desde 1975. Fue cuando se hablaba de la fórmula mágica de que el Estado debía contribuir a "socializar las pérdidas y privatizar

las ganancias". Múltiples empresas y proyectos se echaron adelante, descuidando en innumerables casos los estudios de factibilidad y de riesgos y, por supuesto, el cumplimiento de garantías suficientes de rentabilidad y de respaldo en el aporte de capitales cuando se trataba de "joint-ventures" con el capital privado. El optimismo, la excesiva confianza y el favoritismo que prodigaba la tecno-burocracia estatal, no tardarían en encontrar topes precisamente en la confluencia de una triple contracción de las tasas de crecimiento industrial, agropecuario y exportador, que repercutió sobre las rentas públicas y por esa vía sobre la disponibilidad de recursos de todo tipo para satisfacer la avidez de las clientelas que conforman el sistema político tradicional costarricense, el cual nada tiene que ver en el fondo con un régimen de partidos de cuadros y masas capaz en una época de crisis de imprimirle una dirección coherente y definida a la economía y a la sociedad. Es decir, incapaz de sacrificar si es del caso, la satisfacción de necesidades y expectativas de corto plazo para lo cual se requiere el entrenamiento de la ciudadanía según las normas de un sistema de madurez y control políticos, que aún no existe en el país. Si hay bonanza económica y sobre todo fiscal, entonces el sistema funciona fluida y cómodamente y las clientelas proliferan y se ensanchan alborozadamente; pero si sobreviene una contracción sus dirigentes o "caciques" entran en serios problemas para mantener su ascendiente sobre los séquitos de seguidores. Por su parte, las clientelas forcejean tratando de sacar egoístamente el mejor provecho de una situación en la cual los márgenes para distribuir prebendas se van acabando, y por tanto entran en crecientes y complejos conflictos entre sí, con

lo cual ponen aún más en tensión todo el sistema político, fragmentándolo y clausurando vías de entendimiento que antes era fácil encontrar abiertas. Una especie de anomia política generalizada se desata y los dirigentes sólo buscan salvar las pequeñas porciones de su debilitada esfera de influencia sobre las clientelas de sus seguidores, cayendo de ese modo en la casuística, el oportunismo y la rapiña, es decir, en lo que se denomina "cretinismo político". En tales condiciones se olvidan de cualquier esfuerzo por remontarse más allá de sus linderos inmediatos para buscar fórmulas, llegar a decisiones y solucionar problemas con una visión de conjunto, de verdaderos estadistas nacionales. De allí también, que rápidamente el desarrollismo, basado en un sistema de partidos u organizaciones políticas más inclinadas al clientelismo que a la formación de cuadros y la elaboración de planteamientos ideológicos claros y definidos, liquide o lleve a la liquidación por intermedio de otros actores políticos o militares, lo que se denomina el Estado Liberal de Derecho. Como tipo de organización política viable, sobrevive mientras se puedan atender las demandas clientelistas por medio de compromisos inestables o precarios dentro del marco -en este caso- del desarrollismo, que incorporaba a infinidad de clientelas y sectores de clase burguesa, pequeño-burguesa y obrera en ascenso, dentro de una estructura de poder abierta y flexible. El sistema político democrático-formal funciona entonces regularmente sólo cuando se entra en un proceso de reproducción ampliada o progresiva de excedentes; pero se desestabiliza y propende a ser clausurado en la medida en que dichos excedentes no se generan más y las clientelas entran en procesos de redistribución regresiva donde se benefician en mayor propor-

ción las más poderosas, o sea, las que se desenvuelven en el marco de las clases burguesas y medias más acomodadas. Es cuando surgen las condiciones propicias para la crítica del Estado -Benefactor y Empresario como instrumento inútil para lograr el "progreso con dignidad" sin paternalismo ni corrupción, y cuando también se habla insistentemente de "liberalizar" la economía para que el capital monopólico internacional entre a conjugar la crisis y restituir los niveles perdidos en la caída de la tasa de ganancias y si es del caso hasta la "seguridad nacional".

En otras palabras, se trata por parte de los sectores más poderosos de la sociedad de un intento de redefinir el papel del Estado dentro de los procesos de acumulación y distribución, para asegurar sus posiciones ventajosas, amalgamándose en un bloque de "seguridad nacional" que despierta de inmediato las tensiones de clase social al retroceder las interferencias o contenciones que a las mismas introducía el clientelismo del Estado-Benefactor y Empresario. Las "jerarquías" tienden a reforzarse entonces en detrimento de las "ciudadanías" y la clausura del sistema político democrático-formal puede ponerse en cualquier momento a la orden del día. Conforme se profundice en una sociedad como la costarricense la crisis económica, mayores son los rasgos que se perfilan de una crisis política en el sentido indicado. Las tensiones potenciales se tornan manifiestas y se agudizan ante el embate de los intereses en pugna que no hay liderazgo político que pueda conjugar satisfactoriamente. Las presiones por mayor participación, más "ciudadanía", chocan entonces estrepitosamente con las demandas del capital por incrementar su tasa de ganancias, por "más jerarquía". Los equilibrios, consensos y acuerdos entre los gru

pos o clientelas que se amparaban bajo el alero del Estado distribucionista, ya no lo consideran capaz de sostener la contradicción que media entre esas demandas, por lo que se buscan medios "anormales" para derimir los conflictos o trasladarlos a otros niveles, entre los cuales se cuenta obviamente el llamado Estado de Seguridad Nacional; pero también el desencadenamiento de otros estilos autoritarios y violentos de confrontación típicos dentro de situaciones revolucionarias. ¿Podrá revivirse el Estado-Penefactor y Empresario luego de su casi completa bancarrota, según una versión renovada? ¿Con cuáles márgenes distributivos? ¿Se instaurará más bien en el país una versión criolla del Estado de Seguridad Nacional? ¿O se entrará por un largo y difícil camino de luchas y reformas revolucionarias tendientes a superar los estilos del capitalismo periférico como tales, en pos de un modelo distinto de desarrollo histórico-social? No somos adivinos para intentar predecir el futuro. Todas son opciones con alguna viabilidad y será la lucha social la que determine cuál será la correlación de fuerzas capaz de imponer su proyecto y su dirección al resto de la sociedad. Lo que sí sabemos es que Costa Rica transita hacia una redefinición del papel del Estado, de su modelo político y del conjunto de sus políticas públicas conforme se elevan más y más límites infranqueables para el estilo de desarrollo que llegó a su apogeo en la década pasada.

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES

BIBLIOGRAFIA SOBRE LA EVOLUCION RECIENTE DEL
SECTOR PUBLICO COSTARRICENSE Y SUS
EFECTOS SECTORIALES-REGIONALES

1981

ALBERTS, Joop.

La migración interna en Costa Rica. San José. CELADE. 1971. 102 pp. (Serie AS. 1971) (UNIDI-001993)

ARGUELLO R., Manuel.

Superexplotación, superpoblación y concentración regional en Costa Rica. Heredia. UCID. UNA. 1979. s.p. mimeo. Avance de Investigación. (UNIDI-003348)

BORGE, Víctor; et. al.

La política estatal en el sector industrial. San José. UCR. Agosto, 1973. s.p. mimeo. (

CARCANHOLO, Reinaldo y DIAZ, Alvaro.

Propuesta de investigación: análisis comparativo de las estructuras de mercado en diversas ramas de la industria costarricense. s.l. s.e. 1977. s.p. mimeo. (UNIDI-002117)

CARRERAS, Rodrigo X.

El desarrollo político y los políticos de población en una sociedad prismática. s.l. IDESPO. 1976. 28 pp. mimeo. (UNIDI-001698)

CASTILLO, Donald.

Industrialización y empresas transnacionales en Centroamérica. México. Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales. 1977. 48 pp. fot. (UNIDI-002147)

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Memoria anual 1973. San José. 1974. s.p. (UNIDI-000417)

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Memoria anual 1980. Fiscalización de la Hacienda Pública - Análisis financiero del Sector Público. San José. 10. de marzo de 1981. s.p. (UNIDI-Sin clasificar)

COTO Molina, Walter.

La inversión extranjera directa en el sector industrial. EN: El control de la Inversión Extranjera directa en Costa Rica. San José. UCR. 1975. s.p. tesis. (UNIDI-000046 ; BUCR-Tesis 3275)

CHINCHILLA, Rafael A.

La contraloría del sector público y la institucionalidad autónoma de Costa Rica. San José. s.e. 1978. s.p. (UNIDI-003208)

DIAZ, Alvaro

La promoción estatal del desarrollo del sector industrial en Costa Rica: proyecto de investigación. s.n.t. (UNIDI-002365)

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA.

Planificación operativa o caos Nacional. Tercera Edición. San José. s.e. 1965. s.p.

FERNANDEZ Saborío, María Cecilia
y FERNANDEZ Chaves, Flory.

Evolución y perspectivas de las
empresas públicas no financieras
de Costa Rica. San José. s.e. -
Marzo 1980. s.p.

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES EN
POBLACION (IDESPO)

Informe de trabajo: inventario
de esquemas de regionalización -
del Sector Oficial y Autónomo de
Costa Rica. Heredia. UNA. 1976
s.p. No. 4.
(UNIDI-002915)

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECO
NOMICAS, Escuela de Ciencias Eco
nómicas y Sociales. UCR.

El desarrollo económico de Cos
ta Rica. Estudio No. 4. Sector Pú
blico de la economía costarricen
se. s.l. UCR. 1981. s.p. (Serie
Economía y Estadística No. 10. -
Proyecto de Investigación del de
sarrollo económico de Costa Rica)

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SO
CIALES. UCR.

Los países del M.C.C.A. ante la
crisis. EN: Anuario de Estudios
Centroamericanos. No. 5. UCR. 1979
s.p.
(UNIDI-Publicación Periódica)

INSTITUTO DE TIERRAS Y COLONIZA
CION (ITCO)

El empleo en el sector agríco
la. San José. ITCO. Departamen
to de Planificación. 1979. s.p.
(UNIDI-002369)

ITCO

Proyecto: empleo rural, estado

y políticas públicas. San José.
ITCO. Departamento de Planifica
ción. 1978. s.p.
(UNIDI-002350)

LIZANO F., Eduardo.

Comentarios sobre la economía
nacional. San Pedro de Montes -
de Oca. UCR. Depto. de Publica
ciones. 1973. s.p. (Serie Econo
mía y Estadística No. 5)

LIZANO F., Eduardo.

Costa Rica y la integración e
conómica centroamericana. San -
José. IDELA. 1977. s.p.
(UNIDI-002978)

MINISTERIO DE HACIENDA

Memoria anual 1976. Política
fiscal y estado de la hacienda -
pública. República de Costa Ri
ca. s.n.t.
(UNIDI-Sin clasificar)

MINISTERIO DE HACIENDA

Programa de cambios estructura
les. Tomo I. San José. s.e. Mar
zo 1981. s.p.
(UNIDI-Sin catalogar)

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGU
RIDAD SOCIAL.

Empleo y brecha social: una es
trategia de desarrollo. La expe
riencia de Costa Rica. San José
s.e. 1975. s.p.
(UNIDI-001349)

MORA Ramírez, German y SANDI Fe
tana, Carlos Luis.

Costa Rica: dependencia finan
ciera y tecnológica. Principales

OFIPLAN

La deuda externa de Costa Rica su crecimiento y algunas de sus características. Año 1970-1984. San José. Departamento de Financiamiento. División de Inversiones. 1980. 41 pp.

OFIPLAN. División de Inversiones Depto. Financiero.

La deuda pública externa de Costa Rica. Su crecimiento y algunas de sus características. Años 1970-1976. San José. 1976. 17 pp.

OFIPLAN. División de Inversiones Depto. Financiero.

La deuda pública externa de Costa Rica. Su crecimiento y algunas de sus características. Años 1970-1982. San José. 1978. 31 pp.

OFIPLAN. División de Inversiones Depto. Financiamiento.

La deuda pública externa de Costa Rica. Su crecimiento y algunas de sus características. 1970-1983. San José. 1979. 31 pp.

OFIPLAN. División de Inversiones. Depto. Financiamiento.

La deuda pública externa de Costa Rica. Su crecimiento y algunas de sus características. 1970-1984. s.l. Noviembre 1980. s.p.

OFIPLAN

Memoria anual. 1979-1980. s.n. t.

OFIPLAN

Metas de progreso. (Plan Nacional de Desarrollo 1978-1982). San José. 1977. 122 pp. versión preliminar. (UNIDI-Sin clasificar)

OFIPLAN

Plan nacional de desarrollo. Estrategias y Plan Global. Versión Preliminar. San José. 1974. s.p. (UNIDI-Sin clasificar)

OFIPLAN

Plan nacional de desarrollo. - Sector Público. Versión Preliminar. San José. 1974. s.p. (UNIDI-00420)

OFIPLAN. Depto. de Coordinación y Control.

Plan operativo anual de inversiones públicas, 1968. San José. 1967. 70 pp.

OFIPLAN. Depto. de Coordinación y Control.

Plan operativo anual de inversiones públicas, 1969. San José. 1968. 117 pp.

OFIPLAN. Depto. de Planes de largo y mediano Plazo.


Plan operativo de inversiones públicas para 1970. s.l. 1969. 126 pp.

OFIPLAN.

Plan operativo industrial para el año 1969. s.l. Departamento de Evaluación de Proyectos. Agos

formas de salida de divisas. s.l.
UCR. Facultad de Ciencias Económi-
cas. 1976. s.p.
(BUCR-Tesis 3819)

OFICINA DE INFORMACION. Casa Pre-
sidencial.

 Burocracia estatal. Ideario -
Costarricense. s.l. Unidad de In-
vestigaciones Sociales. 1977.
s.p.

OFIPLAN. División de Planifica-
ción Regional y Urbana.

Algunos resultados preliminares
del estudio para definir la ima-
gen objetivo del desarrollo de -
Costa Rica para el año 2000. San
José. 1976. s.p.

OFIPLAN/BID. Programa de Adies-
tramiento en Preparación y Evalua-
ción de Proyectos.

Crédito global de fomento en el
sector rural. San José. 1979. -
285 pp.

OFIPLAN.

Desarrollo regional y urbano.
San José. 1977. s.p.
(UNIDI-001923)

OFIPLAN.

Diagnóstico de la economía cos-
tarricense. Versión preliminar.
s.l. Noviembre de 1973. s.p.
(UNIDI-Sin clasificar)

OFIPLAN

El desarrollo económico-social
de Costa Rica en el período 1978
-1982: Perspectivas y recomenda-

ciones. San José. 1978. 182 pp.
(UNIDI-Sin clasificar)

OFIPLAN.

Encuesta de empresarios indus-
triales, informe preliminar. San
José. 1976. s.p.
(UNIDI-001383)

OFIPLAN

Estadísticas socio-económicas
No.2. 1970-1978. San José. A-
gosto 1979. s.p.
(UNIDI-003377)

OFIPLAN.

Estudio del crecimiento del -
sector público costarricense.
División de Planes y Política -
Administrativa. San José. 1977.
s.p. (Documento No.1. Algunas -
Proyecciones al futuro)

OFIPLAN

Evaluación de las obras reali-
zadas durante el período de go-
bierno comprendido entre el 8 de
mayo de 1974 y el 30 de agosto -
de 1977, conforme al programa de
gobierno del Lic. Daniel Oduber
Q. para el período presidencial
de los años 1974 a 1978. San Jo-
sé. 1977. 172 pp.

OFIPLAN. División de Inversio-
nes.

Inversión pública: diagnóstico
y recomendaciones. San José. -
1977. 13 pp. (Documento para el
Plan Nacional de Desarrollo 1978
-82)

to 1968. 113 pp.
(CEDOP)

OFIPLAN. Depto. de Planes de largo y mediano Plazo.

Plan operativo industrial para 1970. s.l. 1969. 53 pp.

OFIPLAN. Depto. de Coordinación.

Plan operativo de inversión pública para 1972. San José. 1972. 96 pp.

OFIPLAN. Ministerio de la Presidencia.

Plan operativo del sector agropecuario para 1970. s.l. Depto. Planes de largo y mediano Plazo. Agosto 1970. s.p.

OFIPLAN

Plan operativo para 1971. Pequeña Industria y Artesanía. San José. 1976. 16 pp.

OFIPLAN

Previsiones para el desarrollo económico y social. 1969-1972 y planes del sector público. Tomo II. EN: La Gaceta No.69. s.l. Alcance #17A. Primer Semestre. 24 marzo 1970. s.p.

OFIPLAN

Proyectos del Sector Público: listado de proyectos. San José. 1980. s.p. (Boletín No.8)

OFIPLAN

Región Central: elementos de diagnóstico. Tomo I. San José. 1977. 95 pp.

OFIPLAN. División de Inversiones

Sistema nacional de planificación organización del subsistema nacional de inversiones. Resumen de los principales resultados de la encuesta de proyectos de inversión a cargo del sector público. San José. 1974. s.p.

OSZLAK, Oscar y O'DONNELL, Guillermo.

Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación. Buenos Aires, Argentina. s.e. Marzo 1976. s.p. (Documento CEDES/G.E. CLACSO/No.4)

PEREZ Robles, Virginia.

Crecimiento demográfico y desarrollo económico. s.l. UCR. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 1973. 197 pp. tesis.

PORTUGUEZ, Virginia.

Corporación costarricense de desarrollo. s.l. UCR. Cátedra: Derecho Constitucional I. Junio 1978. s.p. mimeo. (UNIDI)

RAABE C., Carlos y ZUMBADO J., Fernando.

Evolución de la distribución de la población en Costa Rica. San José. OFIPLAN. 1976. 21 pp. (Serie: Divulgación de Estudios Técnicos No.4.)

RAMIREZ B., Mario a y TANZI, Jeannina.

Políticas públicas orientadas a la cuestión de la vivienda en Costa Rica (1950-1980). s.l. UCR. Sistema de Estudios de Postgrado

Maestría de Sociología. 1980. s.
p. mimeo. (Documento de avance:
diseño de tesis)

SALAZAR Navarrete, José Manuel

Política agraria de Costa Rica.
1974-1976. San José. ITCO. 1976.
s.p.
(UNIDI-001978)

SALAZAR N., José Manuel et.al.

Una política agraria innovadora:
el caso de Costa Rica. San -
José. ITCO. 1977. s.p.
(UNIDI-002351)

SANCHO, José.

Antecedentes y perspectivas de
la política institucional de la -
integración centroamericana. s.n.
t.
(UNIDI-001823)

SOLIS, Manuel

La ganadería en Costa Rica. s.
l. Instituto de Investigaciones -
Sociales. UCR. 1981. s.p. inédito.
(UNIDI)

STONE, Samuel

Inversiones industriales en Costa
Rica. s.n.t.
(UNIDI-003097)

TREJOS Paris, Ma. Eugenia y MURI
LLO Rodríguez, Carlos.

Las empresas públicas en el pro
ceso de acumulación de capital en
Costa Rica: (borrador para discusión).
Heredia. Facultad de Ciencias
Sociales. Departamento de E-
conomía. UNA. 1979. s.p.
(UCID-001002 ; UNA)

UCR. Facultad de Ciencias Econó-
micas.

Indicadores económicos y socia-
les: segunda encuesta de coyuntura
industrial. s.l. UCR. 1977. s.
p. mimeo. (No.6 de la serie)
(UNIDI-001977)

VEGA Carballo, José Luis.

Los efectos urbano-demográfico
de la apertura en Costa Rica 1980
-1930. s.l. Instituto de Investi-
gaciones Sociales. UCR. s.f. S.P.
(Ponencia: presentada al III en-
cuentro Latinoamericano de Socio-
logía Urbana, México 1981)

VEGA Martínez, Mylena.

El estado costarricense de 1974
a 1978: CODESA y la fracción in-
dustrial. s.l. UCR. Facultad de
Ciencias Sociales. Escuela de An-
tropología y Sociología. s.f. s.
p.
(B.HISTORIA UCR-Tesis-308 ; BUCR
Tesis-5352)